



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64)
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SECCIÓN
TERCERA**

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinte (2020)

JUEZ	:	Álvaro Carreño Velandia
Ref. Expediente	:	110013336036-2020-00083-00
Demandantes	:	JAVIER ENRIQUE TORRES CURREA
Demandado	:	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES-

**ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA No. 29**

I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede el Despacho a emitir fallo de primera instancia, dentro de la acción de tutela instaurada por **JAVIER ENRIQUE TORRES CURREA** en contra de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES-, a efectos de proteger sus *derechos a petición, debido proceso, indefensión y estado de necesidad*, presuntamente vulnerados, por dicha entidad, en la medida que no resolvió de fondo el derecho de petición radicado el 24 de octubre de 2019, bajo el número E11510251019115618E000034030000, en el que solicitó, se reconociera y pagara la indemnización por muerte y gastos funerarios a los beneficiarios del señor ISMAEL ENRIQUE TORRES VARGAS (qepd), presentada el 22 de abril de 2019.

1.1. Hechos y Pretensiones

1.- El señor Ismael Enrique Torres Vargas (q.e.p.d.) falleció el 7 de enero de 2019, en un accidente de tránsito, lo que otorga el derecho a sus beneficiarios de solicitar ante la ADRES el reconocimiento de indemnización por muerte y gastos funerarios.

2.- El 22 de abril de 2019, bajo el número de radicado E54220419103951R0051017992, fue radicada por la parte accionante ante el ADRES la solicitud de reconocimiento de la indemnización por muerte y gastos funerarios en favor de los beneficiarios del señor Ismael Enrique Torres Vargas (q.e.p.d.).

3.- El 24 de octubre de 2019, se presentó derecho de petición recibido mediante el radicado E11510251019115618E000034030000, en el que fue solicitado se resolviera la reclamación y, consecuentemente se reconociera y pagara la indemnización por muerte y gastos funerarios a los beneficiarios del señor ISMAEL ENRIQUE TORRES VARGAS (q.e.p.d.).

4.- El 26 de diciembre de 2019 mediante radicado número 0000340264 la ADRES dio respuesta al derecho de petición interpuesto indicando el procedimiento que esa entidad debe efectuar para resolver la reclamación, e informó tener un conflicto por incumplimiento contractual de la Unión Temporal Auditores en Salud, por lo que la solicitud del señor TORRES, se encontraba en revisión.

5.- A la fecha, el reconocimiento de la indemnización por muerte y gastos funerarios del señor VARGAS TORRES, no ha sido resuelto, reconocido ni pagado a sus beneficiarios.

1.2. Trámite en esta instancia

En auto del 23 de abril de 2020, se admitió la tutela contra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES-, y se ordenó notificar a su Directora, concediéndosele dos días para que se pronunciara respecto de los hechos de la tutela.

La acción de tutela fue notificada en debida forma a la parte accionada el 23 de abril de 2020, tal como consta en el plenario.

1.3. De la contestación de la acción

1.3.1- Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES-

A través de apoderada judicial, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES- argumentó que el contrato 080 de 2018 fue adjudicado a la Unión Temporal Auditores de Salud en noviembre de 2017 para la auditoría integral de recobros y reclamaciones del sistema de salud, cuyo objeto es el siguiente:

*"CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: Realizar la auditoría integral en salud, jurídica y financiera a las solicitudes de recobro por servicios y tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC y a las reclamaciones por los eventos de que trata el Artículo 167 de la Ley 100 de 1993 con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía –FOSYGA del Sistema General de Seguridad Social en Salud, hoy la ADRES.
{...}"*

Indicó que durante la ejecución del contrato, la ADRES ha venido conminando a la Unión Temporal Auditores en Salud para que cumpla con las obligaciones contractuales y como resultado de este procedimiento y dados los retrasos en la entrega de resultados de auditoría, las demoras en los pagos de las obligaciones laborales de los trabajadores, la falta de personal, entre otras causales, la ADRES ha impuesto entre multas y sanciones por valor de Treinta y cinco mil ochocientos treinta y tres millones doscientos setenta y un mil doscientos setenta y seis (\$35.833.271.276).

Como resultado del incumplimiento del proceso de contratación CMA-DAFPS-001-2017, suscrito con la Unión Temporal Auditores de Salud mediante el contrato número 080 de 2018, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, ha impuesto 3 sanciones y 1 por la omisión sus obligaciones contractuales.

Lo anterior significa que el contratista no puede seguir ejecutando el contrato, situación que ha obligado a ADRES a asumir asuntos encargados a ellos, entre esos el cumplimiento de sentencias judiciales.

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la ADRES suspender la ejecución del contrato 080 de 2018 con la Unión Temporal Auditores por más de \$140.000 millones, y adelantar el procedimiento administrativo para que el contratista ceda o renuncie a la ejecución de este.

Informó que ante el incumplimiento de la Unión Temporal Auditores en Salud aunado a la inhabilidad sobreviniente del 27 de diciembre de 2019, la ADRES se encuentra tomando las medidas administrativas pertinentes para superar todo el atraso que venía reprimido debido a los incumplimientos a fin de dar una pronta solución a las solicitudes que estaban a cargo de la Unión Temporal Auditores en Salud y a las nuevas reclamaciones que se están radicando directamente en la ADRES.

Con ocasión a la acción de tutela, se solicitó información a la Dirección de Otras Prestaciones la cual manifestó que la reclamación 51017992 una vez surtido el trámite de auditoría respectivo, tuvo como resultado "no aprobada". En ese sentido se le comunicó al accionante que podrá subsanar u objetar las glosas impuestas en el resultado de auditoría dentro de los 2 meses siguientes al recibido. Dicha respuesta fue emitida mediante radicado S115101804201130061000004238800, el 18 de abril de 2020.

Solicitó al Despacho declarar improcedente la presente acción constitucional, en el entendido que existe un problema estructural que es objeto de seguimiento por parte de la Corte Constitucional, relativo a las fallas de la regulación que afectan el flujo de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que se concreta en la imposibilidad de adelantar directamente la verificación del cumplimiento de los requisitos de los recobros y de las reclamaciones.

Subsidiariamente solicitó en caso de no acceder a la declaratoria de improcedencia, se niegue el amparo solicitado por el accionante, pues de

los hechos descritos y el material probatorio enviado con el traslado resulta innegable que la entidad no ha desplegado ningún tipo de conducta que vulnere los derechos fundamentales del actor, puesto que el trámite de la reclamación depende del envío por parte de la Unión Temporal de los soportes respectivos.

II. CONSIDERACIONES

2.1.- Competencia

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1382 de 2000 y el Decreto 1983 de 2017, este Despacho es competente para conocer y decidir el asunto.

2.2.- Problema Jurídico

Establecer si se han vulnerado los derechos fundamentales de petición, debido proceso, indefensión y estado de necesidad del accionante, por parte de la **Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES-**, en la medida que según lo adujo no resolvió de fondo el derecho de petición radicado el 24 de octubre de 2019, bajo el número E11510251019115618E000034030000, en el que el accionante solicitó se reconociera y pagara la indemnización por muerte y gastos funerarios a los beneficiarios del señor ISMAEL ENRIQUE TORRES VARGAS (q.e.p.d.), presentada inicialmente el 22 de abril de 2019.

Para resolver los anteriores cuestionamientos, el Despacho dará preminencia al derecho de petición y debido proceso que el accionante considera vulnerados y tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

2.4- Derechos fundamentales vulnerados

cada uno de los casos concretos para asegurar el goce efectivo de un derecho fundamental. La principal misión que la Constitución encomienda al juez de tutela es tutelar los derechos que considera que han sido violados o amenazados y tomar las medidas necesarias para que tal situación cese. En tal medida, ha considerado la jurisprudencia que se pueden distinguir dos partes constitutivas del fallo: la decisión de amparo, es decir, la determinación de si se concede o no el amparo solicitado mediante la acción de tutela, y la orden específica y necesaria para garantizar el goce efectivo del derecho amparado".

2.4.2.- Derecho de petición

La Constitución Política en su artículo 23, consagró el derecho de petición como derecho fundamental, precepto que, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional, faculta a toda persona a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, o ante las organizaciones privadas en los términos que señale la ley.

En efecto, La Ley 1755 de 2015 por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 13 establece que toda persona tiene derecho hacer peticiones respetuosas a las autoridades, verbalmente, por escrito o a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos; así mismo, dispone que las peticiones se resolverán dentro de los **15 días hábiles** siguiente a su recepción, y de no ser posible contestarla o resolverla en dicho término, *"la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto"*. (Artículo 14 CPACA, sustituido por la Ley 1755 de 2015).

Así las cosas, el núcleo esencial del derecho de petición lo constituye, que el peticionario pueda obtener pronta y oportuna resolución a la petición

formulada, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve, o se reserva para sí, el sentido de lo decidido.

El derecho de petición no sólo consiste en obtener una respuesta por parte de las autoridades, sino a que éstas resuelvan **de fondo, de manera clara y precisa la petición presentada** y se requiere que la respuesta se produzca dentro de un plazo razonable.

2.5.- Caso en concreto

En el presente asunto el accionante consideró vulnerado sus derechos a petición, debido proceso, indefensión y estado de necesidad, presuntamente vulnerados, por la **Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES-**, en la medida que no resolvió de fondo el derecho de petición radicado el 24 de octubre de 2019, bajo el número E11510251019115618E000034030000, en el que el accionante solicitó se reconociera y pagara la indemnización por muerte y gastos funerarios a los beneficiarios del señor ISMAEL ENRIQUE TORRES VARGAS (q.e.p.d), presentada inicialmente el 22 de abril de 2019, registrada bajo el número 51017992-00.

Se abordará el asunto con preminencia de los derechos de petición y al debido proceso, como se indicó en líneas precedentes y se iniciará con el estudio de la normatividad relativa al procedimiento administrativo para atender la reclamación por muerte y gastos funerarios ante el ADRES.

El artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016, establece:

“Termino para resolver y pagar reclamaciones. Las reclamaciones presentadas con cargo a la Subcuenta ECAT del Fosyga a que refiera el presente Capítulo, ***se auditan integralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre de cada periodo de radicación,*** los cuales serán establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Si hubo lugar a la imposición de glosas como consecuencia de la auditoría integral a la reclamación, el Ministerio de Salud y Protección Social comunicará la totalidad de ellas al reclamante quien deberá subsanarlas u objetarlas dentro de los dos (2) meses siguientes a la comunicación de su imposición. Si transcurrido dicho término no se recibe información por parte del reclamante se entenderá que acepto la glosa impuesta.

El Ministerio de Salud y Protección Social o quien este designe, pagará las reclamaciones que hubiesen sido glosadas, dentro del mes siguiente a la fecha del cierre efectivo y certificación del

proceso de auditoría integral, so pena del pago de intereses moratorios en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio.

Las reclamaciones presentadas ante las entidades aseguradoras autorizadas para operar el SOAT se pagaran entro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado de acuerdo con el artículo 1077 del Código de Comercio. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagara al reclamante, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Financiera aumentando en la mitad". (Negrilla del Despacho).

A su vez los artículos 15 y 24 de la resolución 1645 del 3 de mayo de 2016, establecen:

"Artículo 15. Desarrollo de la Etapa de auditoría Integral. Durante esta etapa, que se desarrolla dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre del periodo de radicación, el Fosyga o quien haga sus veces realizara la validación del cumplimiento de los aspectos mínimos de verificación consignados a continuación, mediante el análisis de la información suministrada por el reclamante en las etapas de pre radicación y radicación:

A. Aspectos mínimos de verificación para reclamaciones por servicios de salud:

B. (...)".

Artículo 24. Respuesta al resultado de auditoría. El reclamante podrá dar respuesta al resultado de auditoría, subsanando u objetando en **una única oportunidad la totalidad de glosas aplicadas, dentro de los dos (2) meses siguientes al recibo de la comunicación del resultado de la auditoría integral, aportando los documentos que correspondan o sustentando en forma concreta los motivos de objeción a la glosa.** La objeción no puede versar sobre nuevos hechos ni debatir argumentos diferentes a los contenidos en el resultado de la auditoría. Para el efecto, el reclamante deberá diligenciar el respectivo formulario y anexo técnico, según corresponda, señalando que se trata de una respuesta al resultado de auditoría, para lo cual relacionará el número de radicado de la reclamación sobre la cual está presentando la respuesta.

Las IPS no podrán incluir reclamaciones de primera vez en la respuesta a resultados de auditoría. Si el reclamante no da respuesta al resultado de auditoría en el término de dos (2) meses

contado a partir del recibo de la comunicación, se entenderá que aceptó la glosa impuesta, con lo cual, el respectivo ítem adquiere con carácter definitivo el estado "no aprobado".

La respuesta a los resultados de auditoría se tramitará en el término de dos (2) meses, surtirá las mismas etapas del procedimiento de verificación y control para pago de las reclamaciones ante el FOSYGA o quien haga sus veces y será objeto de comunicación a los reclamantes en las mismas condiciones establecidas en los artículos 22 y 23 del presente acto administrativo, indistintamente de la fecha de presentación de la reclamación inicial.
(...)"

Así las cosas en los eventos en los cuales la reclamación se deriva de la muerte de una persona en un accidente de tránsito, en el que se involucra un automotor que no cuenta con la póliza SOAT, el parágrafo 2 del artículo 167 de la Ley 100 de 1993 señala que los afectados pueden acudir para el reconocimiento de indemnizaciones a la Subcuenta del Fondo de Solidaridad y Garantía, hoy ADRES:

"Artículo 167. RIEGOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO. En los casos de urgencias generadas en accidentes de tránsito (...) los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud tendrán derecho al cubrimiento de los servicios médico-quirúrgicos, indemnización por incapacidad permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro asistencia. El Fondo de Solidaridad y Garantía pagará directamente a la Institución que haya prestado el servicio a las tarifas que establezca el Gobierno Nacional de acuerdo con los criterios del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
PARÁGRAFO 1º. En los casos de accidentes de tránsito, el cubrimiento de los servicios médico-quirúrgico y demás prestaciones continuará a cargo de las aseguradoras autorizadas para administrar los recursos del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito con las modificaciones de esta Ley.

PARÁGRAFO 2º. Los demás riesgos aquí previstos serán atendidos con cargo a la subcuenta del Fondo de Solidaridad y Garantía, de acuerdo con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional".

Y el artículo 66 de la ley 1753 de 2015, preceptúa:

ARTÍCULO 66. DEL MANEJO UNIFICADO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS). Con el fin de garantizar el adecuado flujo y los respectivos controles de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, créase una entidad de naturaleza especial del nivel descentralizado del orden nacional asimilada a una empresa industrial y comercial del Estado que se denominará Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). La Entidad hará parte del SGSSS y estará adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente.

(...)

La Entidad tendrá como objeto administrar los recursos que hacen parte del Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), los del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet), los que financien el aseguramiento en salud, los copagos por concepto de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios del Régimen Contributivo, los recursos que se recauden como consecuencia de las gestiones que realiza la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); los cuales confluirán en la Entidad. En ningún caso la Entidad asumirá las funciones asignadas a las Entidades Promotoras de Salud.

Por su parte el artículo 77 de la citada Ley, establece:

"Artículo 73. PROCESOS DE RECOBROS, RECLAMACIONES Y RECONOCIMIENTO Y GIRO DE RECURSOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD.

Los procesos de cobros, reclamaciones y giro de recursos del aseguramiento en Salud que se surten ante el Fosyga o la entidad que asuma sus funciones se regirán por las siguientes reglas:

Tratándose de cobros y reclamaciones:

- a) El término para efectuar reclamaciones o cobros que deban atenderse con cargo a los recursos de las diferentes subcuentas del Fosyga será de tres (3) años a partir de la fecha de la prestación del servicio, de la entrega de la tecnología en salud o del egreso del paciente. Finalizado dicho plazo, sin haberse presentado la reclamación o cobro, prescribirá el derecho a recibir el pago y se extingue la obligación para el Fosyga".

De acuerdo con las normas transcritas, la obligación de atender las reclamaciones con cargo al Fondo de Solidaridad y Garantías, recae en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES. Adicionalmente la Resolución 1645 del 3 de mayo de 2016 señaló que el ADRES contrataría una firma auditora para la verificación del

cumplimiento de los requisitos y procedimientos que se adopten para el efecto y que la firma auditora debería auditar la reclamación dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre de radicación.

En el presente asunto, según consta en el derecho de petición radicado con el escrito de tutela, el día 25 de octubre de 2019, el accionante presentó bajo el número de radicado E11510251019115618E000034030000, solicitud ante el ADRES a efectos de que se resolviera la reclamación radicada el **22 de abril de 2019**, bajo el número E54220419103951R0051017992, en la que se solicitó el reconocimiento de la indemnización por muerte y gastos funerarios en favor de los beneficiarios del señor Ismael Enrique Torres Vargas (q.e.p.d), registrada bajo el número 51017992-00.

En este orden de ideas el término de dos (2) meses siguientes al cierre de radicación establecido en el artículo 17 de la Resolución 1645 de 2016, se venció el **22 de junio de 2019**, término que se encuentra ampliamente vencido.

Ahora bien, la entidad accionada informó a éste Despacho que mediante radicado S115101804201130061000004238800, de fecha 18 de abril de 2020, dio respuesta a la reclamación del accionante en la que se le indicó que, la misma se encontraba en estado "NO APROBADA" y que debería ser subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes al recibido de la comunicación, respuesta que fue recibida por la parte actora como lo indicó en el presente trámite, indicándosele lo siguiente:

"En relación con la reclamación de la referencia, presentada ante la ADRES, se informa que una vez surtido el correspondiente trámite de auditoría integral, de conformidad con la normativa vigente, la reclamación adquirió estado de "NO APROBADA", por las causales de glosa que se enuncian a continuación:

Código	Descripción
335.4	El formulario furpen no se encuentra completamente diligenciado, No se diligenció campo (V y VI), Dirección, teléfono, municipio, Dpto del propietario y Municipio, Dpto del conductor.
359.3	En la certificación bancaria aportada por el/(a) reclamante, el nombre del titular de la cuenta debe ser del beneficiario reclamante, en consecuencia debe aportar certificación de cuenta bancaria generada por entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia con vigencia de expedición no mayor a tres (3) meses respecto a la fecha de presentación de la respuesta a glosa, cuyo titular sea la persona natural

	beneficiaria, donde indique nombre, tipo y número de identificación, tipo y número de cuenta
360.3	No aportó poder debidamente otorgado y autenticado ante notario por parte de la madre de la víctima en favor del beneficiario reclamante.
364.1	El registro civil de nacimiento aportado no es válido, para que tenga validez en el territorio colombiano, debe estar apostillado por la Entidad competente del país de origen.
NOTA(S) ACLARATORIA(S) Si objeta, Indicar en forma concreta los motivos de la objeción y en qué documento se soporta la misma. Y en caso de adjuntar nuevo documento; este debe ser relacionado con el motivo de la objeción. Y si es para subsanar las glosas impuestas adjuntar los soportes correspondientes y precisar a qué glosa corresponde; junto con el FURPEN completamente diligenciado y en debida forma.	

Ahora bien, de conformidad con los artículos 23 y 241 de la Resolución 1645 de 2016, el reclamante podrá dar respuesta al resultado de auditoría dentro de los dos (2) meses siguientes al recibido de la comunicación de resultados de la auditoría integral para subsanar u objetar las glosas impuestas.

Si el reclamante no da respuesta al resultado de auditoría en este término, se entenderá que aceptó la(s) glosa(s) impuesta(s), con lo cual, la reclamación adquiere el estado definitivo de "no aprobado".

Dada la contestación de la ADRES frente al derecho de petición radicado el día 25 de octubre de 2019, en el que la parte actora solicitó resolver la reclamación radicada el día 22 de abril de 2019, considera éste Despacho que se encuentra ampliamente superado el término para resolver, pues la entidad informó al accionante el estado de su reclamación como "No aprobada", indicándole las causales y los documentos que debería aportar en el término de 2 meses, que y la misma fue comunicada la parte actora, como lo indicó dentro del presente trámite constitucional la apoderada del señor **JAVIER ENRIQUE TORRES CURREA** en correo electrónico remitido a éste Despacho el 30 de abril de los cursantes en el que dio traslado de la respuesta remitida por la entidad accionada ADRES; razón por la que el Despacho estima que a la fecha no se encuentra vulneración del derecho de petición por lo que el mismo no será amparado.

Sin embargo y pese a la contestación brindada por la entidad accionada, considera el Despacho que la respuesta no solamente se brindó de forma extemporánea sino que la entidad accionada desatendió los términos establecidos en el Decreto 780 de 2016 y la Resolución 1645 de 2016; el actuar del ADRES no se ajustó a los parámetros del debido proceso

administrativo, los cuales se deben regir por los principios de economía, celeridad y publicidad, tal como lo establece el artículo 209 de la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional; por el contrario atendió la reclamación de forma tardía.

Ahora bien, frente a la sujeción en los términos para atender actuaciones administrativas la Corte Constitucional en la sentencia T-647 de 2013, dispuso que *"es esencial la aplicación del principio de celeridad en la administración de justicia. Ello se desprende directamente del artículo 228 de la Constitución, e indirectamente del artículo 209, cuando sostiene que el principio de celeridad debe caracterizar la actuación administrativa". Por ello, las dilaciones injustificadas por parte de las entidades no pueden generar respuestas negativas ni conllevar a la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, comoquiera que se le estaría imponiendo una carga adicional a ellos*". (Negrilla del Despacho).

Finalmente, respecto de la manifestación realizada en el escrito de contestación de la acción de tutela frente a que el contrato de auditoría 080 de 2018, celebrado con la Unión Temporal se encuentra incumplido; dicho argumento no es de recibo para el Despacho, toda vez que los conflictos suscitados entre la firma auditora y la ADRES no pueden ser impedimento para desatender la reclamación del accionante en los términos de Ley.

Por las anteriores razones el Despacho amparará el derecho al debido proceso solicitado por la parte actora, a fin de que la ADRES resuelva la reclamación del accionante en el término de quince (15) contados a partir del vencimiento del término otorgado por la entidad accionada al accionante para subsanar su reclamación, en todo caso, si la parte actora llegare a subsanar la reclamación antes del término previsto e inicialmente otorgado, se contará, los 15 días a partir del día siguiente de la presentación del escrito de subsanación.

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: Amparar el derecho fundamental al Debido Proceso del accionante **JAVIER ENRIQUE TORRES CURREA**, conforme las razones aducidas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Ordenar a la **Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES-** que resuelva la reclamación de indemnización por muerte y gastos funerarios presentada por el accionante

JAVIER ENRIQUE TORRES CUREA el 22 de abril registrada con el número 51017992-00, en el término máximo de quince (15) contados a partir del vencimiento del término otorgado por la entidad accionada para subsanar su reclamación. En todo caso, si la parte actora subsana la reclamación antes del término previsto e inicialmente otorgado, se contarán los 15 días a partir del día siguiente de la presentación de la subsanación.

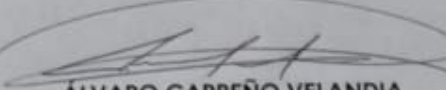
TERCERO: Negar el amparo al derecho de petición, solicitado por el accionante conforme a las razones de la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: INSTAR a la parte actora para que cumpla dentro del término previsto de dos (2) meses, con la subsanación de la reclamación conforme a lo establecido en el artículo 24 de la resolución 1645 del 3 de mayo de 2016.

QUINTO: Por Secretaría, notificar el presente fallo en la forma establecida en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: En firme la presente providencia, y en el evento en que no fuere impugnada, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ÁLVARO CARREÑO VELANDIA
Juez

ms